

# ***El retorno a la democracia en América Latina. ¿Mito o realidad?***

**José Cayuela**

Durante 1978 y 1979 ocurrieron una serie de acontecimientos políticos que parecían presagiar la progresiva democratización de América Latina, un continente tradicionalmente regido por dictaduras militares. Se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, la República Dominicana y Venezuela y tuvieron lugar también diversas otras formas de votaciones populares: parlamentarias en Brasil, parlamentarias y municipales en El Salvador y Guatemala y destinadas a la formación de una asamblea constituyente en Perú.

Por otra parte, a mediados de 1979 la victoria del movimiento sandinista en Nicaragua puso fin a una de las tiranías más crueles y prolongadas (cuarenta años) de la región.

La cuestión es si todos estos sucesos significan que estamos en vísperas de cambios importantes, como los que ocurrieron en Colombia en 1957 cuando el dictador Gustavo Rojas Pinilla fue derrocado y sustituido por una coalición de los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador y en Venezuela en 1958, cuando Marcos Pérez Jiménez fue expulsado del poder por un alzamiento cívico-militar.

En otras palabras, la disyuntiva es si la década de 1980 se iniciará con el fortalecimiento de regímenes civiles democrático-burgueses o si la democracia que pueda surgir en países sometidos a dictaduras militares quedará sujeta a severas limitaciones.

O para ponerlo en términos más concretos, si la tendencia será hacia el retorno a sistemas de gobierno como los que existieron durante largo tiempo en Chile y Uruguay o hacia la consolidación de régimen es como el brasileño actual.

Por diversas razones, que procuraremos analizar en este artículo, pensamos que la palabra misma, democracia, se verá sometida a calificaciones y adjetivos variados: "controlada", "autoritaria", "restringida", "limitada" y que serán gobiernos con ese tipo de etiquetas los que habrán de predominar en el continente.

Son esos calificativos los que parecen proporcionar la clave acerca del futuro político de una región en la que, a fines de 1979, sólo cinco países, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, estaban más o menos cerca de una definición

de democracia tal como se la practica en naciones con las que el término es habitualmente asociado: Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Por ahora, entonces, pareciera más bien inexacto o ilusorio hablar de "retorno a la democracia" en una zona donde la democracia por lo demás no ha sido practicada sino en contadísimos países y por períodos históricamente muy breves. Las dos naciones latinoamericanas con mejores y más antiguas credenciales para reivindicar títulos democráticos, Chile y Uruguay, que eran hasta la década del setenta genuinas excepciones dentro de un mapa totalitario generalizado, se encuentran ahora sometidas a brutales regímenes militares. Más aún, parece altamente improbable que la democracia retorne a esos dos estados del cono sur de América en que mejor se cumplían aquellos requisitos establecidos en definiciones de teóricos occidentales como el francés Maurice Duverger:

"En los regímenes pluralistas o democráticos la lucha política tiene lugar libremente, a la luz del día y de manera que todos puedan verla. Primero, hay varios partidos políticos y de allí el término "pluralista"; estos pueden ser más de dos pero siempre hay por lo menos dos. La lucha es pública y abierta; hay libertad de pensamiento y libertad de prensa y de otros medios de información. Los regímenes pluralistas son también liberales, es decir regímenes en que se resguardan las libertades públicas y en que todos pueden expresar libremente sus opiniones, oralmente, por escrito uniéndose a organizaciones o tomando parte en demostraciones públicas..."<sup>1</sup>

Esta definición no parece calzar con los proyectos de los gobernantes de regímenes como los de Brasil, Uruguay o Chile cuando hablan de ceder el paso a gobiernos civiles y libremente elegidos. Pero incluso si pudiera aplicarse a la mayoría de los sistemas imperantes de América Latina y no sólo (con reservas) a los cinco ya mencionados, habría que argumentar que las metas propuestas por Duverger son limitadas y se refieren solamente a los derechos políticos y civiles de los individuos. Ignora en cambio completamente otros derechos fundamentales en una verdadera democracia, como son los de tipo económico y social. Es decir, una distribución equitativa de la riqueza, educación y salud gratuita o al alcance de todos y participación en la administración y orientación en las instituciones o empresas en que los individuos trabajan y estudian. En este sentido, para muchos, Cuba es el más democrático de los países latinoamericanos.<sup>2</sup> Pero, obviamente, su régimen político no tiene nada que ver con la noción de democracia de tratadistas como Duverger. En una situación similar parecía encontrarse - hasta el momento de escribir este artículo, enero de 1980 - Nicaragua, país en el que tiene lugar un fascinante experimento con un modelo democrático en el que predomina la atención hacia los aspectos económicos y sociales.

<sup>1</sup> Duverger, Maurice: **The Idea of Politics - The uses of power in Society**. Londres, 1967.

<sup>2</sup> Acerca de como opera la participación en una sociedad socialista ver Harnecker, Marta: **Cuba, Democracia o Dictadura**, México, 1978 y, en un sentido más crítico, Cardenal, Ernesto: **En Cuba**, Barcelona, España, 1977 y también Yglesias, José: **In the Fist of the Revolution**, Londres, 1970.

Es precisamente la combinación de ambas formas de democracia, civil y política por una parte, económica y social por otra, la que parece tan difícil de alcanzar, en cualquier latitud, pero muy en especial en regiones sometidas al atraso y a la explotación durante toda su historia. En países como Suecia o Gran Bretaña, con sus amplios sistemas impositivos y de bienestar social, desarrollados durante largos períodos como instrumentos esenciales de distribución de la riqueza, se han hecho avances importantes.\* Pero con ello ha sido posible gracias a su condición de viejas naciones desarrolladas e industrializadas que han acumulado recursos suficientes para financiar muy altos niveles de gasto público. En países mucho más pobres y atrasados, como los de América Latina, los recursos existentes no permiten la coexistencia de una minoría muy rica integrada por las clases dominantes y caracterizada por sus hábitos de consumo altos y caros y de una mayoría de la población razonablemente atendida en sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud. Ni permiten que ambos grupos gocen a cabalidad de sus derechos políticos y civiles. Invariablemente, el sector mayoritario, y más pobre, se ve privado no sólo de una justa participación en la renta nacional sino también de sus derechos políticos. Cualquier intento de extender en forma significativa el goce de los derechos económicos y sociales a la masa de la población implica profundos cambios en los sistemas políticos y provoca violentas reacciones de parte de los sectores privilegiados.

Estos son los elementos de juicio que deberían estar presentes al examinar los acontecimientos políticos de América Latina y la aparente tendencia a la democratización que tiene lugar como resultado de diversas presiones. Entre las más importantes habría que citar la política exterior del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, basada ostensiblemente en su preocupación por el respeto de los derechos humanos y los esfuerzos coordinados de los gobiernos de los países integrantes del Pacto Andino. Y es con esos elementos a la vista que nos proponemos analizar algunos de los más interesantes y reveladores episodios de la evolución política reciente de América Latina.

### ***La crisis permanente de Bolivia***

En las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia el 9 de julio de 1978, las primeras desde el golpe de agosto de 1971 en que el general Hugo Banzer derrocó al general Juan José Torres, el candidato oficial, Juan Pereda Asbún, no estaba dispuesto a respetar mayores formalidades. Cuando los candidatos de oposición y algunos prominentes observadores extranjeros acusaron al gobierno de flagrante fraude y favoritismo, el general Pereda organizó un golpe en Santa Cruz, la capital del oriente boliviano, derrocó a Banzer y se proclamó elegido. Tras laboriosas negociaciones con la oposición, Pereda aceptó constituir una comisión de alto nivel para determinar el procedimiento conducente a una nueva y supuestamente

---

\* La situación está muy lejos de ser ideal en Gran Bretaña al menos, como he procurado demostrarlo en mi libro "**Derechos Inhumanos en Gran Bretaña**", Barcelona, 1979.

limpia elección presidencial en 1980. Pero, fiel a su trágica historia de inestabilidad, en menos de dieciséis meses el país vio sucederse otros dos golpes de estado y un total de cuatro presidentes. El último, la diputada Lidia Gueiler, era el número 189 desde que Bolivia obtuvo su independencia en 1825. Por cierto, durante todo ese período de esfuerzos por implantar un régimen democrático civil, los viejos dirigentes salidos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) o de alguna de sus divisiones demostraron estar mucho más interesados en recuperar el control del aparato institucional del estado que en proponer planes para mejorar la dramática situación económica de la mayoría del pueblo boliviano.

### ***El modelo brasileño***

En Brasil, el triunfo de otro candidato militar y oficial en las elecciones presidenciales de octubre de 1978 no sorprendió a nadie. El general Joao Baptista Figueiredo contó con la bendición de su predecesor, el general Ernesto Geisel. Ambos fueron seleccionados en su oportunidad por un colegio electoral integrado por civiles pertenecientes en una proporción de dos tercios y de acuerdo con la ley electoral al partido de gobierno, ARENA. Figueiredo recibió 355 votos contra 266 de su oponente el general Bentes Monteiro. De hecho, el elemento más importante de todo el proceso fue la serie de negociaciones que tuvieron lugar en el interior del único partido opositor, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) para seleccionar a Bentes y para tratar de introducir importantes cambios en el especialísimo sistema impuesto por los militares desde el derrocamiento del presidente Joao Goulart en 1964. Los desacuerdos surgidos al interior del MDB y en especial los que se evidenciaron en la jerarquía militar mostraron que el sistema no era tan sólido ni estable como parecía. Las elecciones parlamentarias celebradas en 1968 y que culminaron con importantes avances de la oposición, particularmente en las grandes ciudades, permitieron apreciar el nuevo sentimiento de libertad que ya se notaba en el movimiento estudiantil, en la prensa y en algunos sectores de la clase obrera. Todo ello planteó numerosas interrogantes sobre el futuro político de un país que tanto por sus dimensiones geográficas y demográficas como por su grado de desarrollo industrial está llamado a ejercer una influencia decisiva en la región.

Parecía claro que había llegado el momento de introducir cambios de importancia en el régimen surgido del golpe de 1964. Como lo dijo el general Bentes Monteiro, "un país de 113 millones de habitantes no puede ser gobernado por un grupo de 13..."

Pero esto era mucho más obvio que el tipo de régimen que podría imponerse en un Brasil democrático luego de los profundos cambios políticos, sociales y económicos introducidos durante los catorce años de dictadura militar. Para ilustrar esas transformaciones baste señalar que en 1964 la fuerza laboral industrial era

equivalente al 14 por ciento de la población activa mientras en 1978 llegaba ya al 40 por ciento, un porcentaje similar al de la fuerza laboral rural.<sup>3</sup>

El nuevo presidente, general Figueredo, introdujo importantes modificaciones en el sistema que había imperado prácticamente sin cambios desde 1968: dismanteló el mecanismo de selección de los candidatos presidenciales y decretó la desaparición del bipartidismo, abriendo el camino para el restablecimiento de un régimen pluripartidista. La oposición acusó al régimen de un renovado afán de mantener a la casta militar en el poder, ya que se hizo desaparecer al MDB precisamente cuando había conseguido canalizar y unificar considerablemente a los grupos opositores civiles.

En todo caso, la extraordinaria riqueza y variedad de la prensa surgida en los últimos cuatro o cinco años, el vigor mostrado por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles parecen ilustrar en Brasil mejor que en otros países sometidos a largos años de dictadura que, por una parte, los militares consiguieron destruir el sistema político existente en 1964 e impusieron un nuevo y aparentemente sólido modelo económico. Pero, por otra, no lograron crear un régimen político estable y, al cerrar las posibilidades legales de participación llevaron al país a una situación en que la lucha por el poder político formal (ejecutivo, legislativo) tiene mucha menos trascendencia que el control de mecanismos de presión entre los cuales los más importantes son los medios de comunicación y los sindicatos.

Resulta difícil predecir qué forma exacta adoptará en definitiva la democracia que según el propio general Figueredo ha de funcionar en Brasil, pero está claro que permanecerá sujeta a severas limitaciones y controles.

La cuestión es si el nuevo esquema será capaz de hacer frente a las presiones de una clase trabajadora completamente distinta a la existente en 1964 por mejorar sus niveles de vida sistemáticamente menoscabados a lo largo de una experiencia económica impuesta durante quince años y que se basó en la contracción del ingreso real como fórmula para combatir la inflación y atraer a capitales extranjeros. Hasta fines de la década del setenta, la "democracia controlada" brasileña fue abriendo ciertos espacios que permitieron la reaparición de nuevas formas de participación política pero está por verse el grado de importancia y la capacidad de desafío al sistema que podrán asumir esas nuevas formas. Ya en 1964 la derecha brasileña y la jerarquía militar demostraron que el límite de su tolerancia de la democracia política está en aquel punto en que el goce de los derechos cívicos pretende extenderse al campo mucho más sensible de los derechos económicos y sociales. Si dicha ampliación significa sacrificar los privilegios detentados por las clases dominantes, estas no dudarán, como lo hicieron en 1964, en derogar los mecanismos políticos formales que sirvan de cauce a la democratización económica y social.

---

<sup>3</sup> *Latin America Economic Report*, 26 de mayo de 1978. pág. 160.

### ***El caso de Uruguay***

Uruguay nunca fue considerado como ejemplo importante debido a su escaso tamaño, tanto en términos de territorio como de población. Sin embargo, los uruguayos gozaron durante un largo período de un grado de estabilidad política, prosperidad y desarrollo cultural que los hizo crecer como símbolos de las aspiraciones del resto del continente. Pero todo esto comenzó a desmoronarse lentamente durante la década de 1960 y en especial en el período transcurrido desde 1967 hasta 1973. Daba la impresión de que la esencia misma del sistema institucional hubiese alcanzado una situación irreversible de agotamiento y desintegración. Los dos partidos tradicionales, Blanco y Colorado, se mostraron incapaces de hacer frente a una crisis económica muy severa que se inició a mediados de la década de 1950 y a una oposición izquierdista cada vez más radical y audaz. En ella podía encontrarse a dirigentes sindicales revolucionarios como Raúl Sendic y a personalidades independientes muy poco características de la tradición política uruguaya, como el general Liber Seregni. En aquel breve lapso de cinco años, tanto la manera tradicional de hacer política, representada por el ordenado alternarse en el poder de Blancos y Colorados como el nuevo estilo, encarnado en el extremismo izquierdista del Movimiento Tupamaros y en la combinación de fuerzas progresistas conocida como Frente Amplio se vieron aplastadas por la extrema derecha civil, aliada con los militares la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y el gobierno militar brasileño.<sup>4</sup>

A comienzos de 1980 y después de casi una década de implacable represión política y económica, Uruguay seguía mostrando la más alta proporción de presos políticos en relación al tamaño de su población de cualquier país del mundo. Ya en 1977, según Amnesty International, había 5.000 "prisioneros de conciencia" en las prisiones, cuarteles militares y centros de tortura uruguayos.<sup>5</sup>

La persecución de todo grupo o individuo que luchase por fórmulas institucionales que pusieran en peligro los privilegios de la clase dominante reflejaba la profundidad de una crisis económica que hacía ya imposible mantener al mismo tiempo esos privilegios y el sistema de seguridad social del que los uruguayos gozaban hasta mediados de la década de 1960. La crisis se manifestaba en índices como los siguientes: el producto per cápita había descendido de un valor máximo de 960 dólares en 1956 (tomando como base los precios de 1970) a alrededor de 900 dólares como promedio en los años siguientes a 1966. La producción agropecuaria, primera fuente de divisas, permaneció en los niveles de comienzos de la década de 1950 y el índice de producción industrial cayó en un diez por ciento en el período 1973-1974, comparado con el que tuvo en 1956. La inflación, que en el mismo 1956 llegaba a un índice de 6.0 por ciento, excepcional en la región, y en

<sup>4</sup> Philip Agee proporcionó algunos detalles de la acción de la CIA en Uruguay en su *CIA Diary - Inside the Company*, Nueva York, 1975.

<sup>5</sup> *Amnesty International Report 1977*, pág. 162.

que entre 1957 y 1961 se mantuvo en un promedio anual de 25 por ciento, llegó al 168 por ciento en 1968. Aún en el período 1973-1979, después de la aplicación de drásticas medidas monetaristas y recesivas, se situaba en un promedio anual de 50-60 por ciento.<sup>6</sup>

Es decir, la crisis económica se había institucionalizado, a pesar de una política tan drástica como la instrumentada en Chile después del golpe militar de 1973 y que había tenido un costo dramático en términos de pérdida de capital humano: de acuerdo al censo de 1975, entre 1963 y 1975 emigraron 300.000 personas, el equivalente al 12 por ciento de una población de 2 millones 764 mil habitantes. En 1979 se estimaba que el porcentaje del éxodo llegaba ya al 20 por ciento de la población activa, incluyendo al 14.4 por ciento de los egresados universitarios y el 18.4 por ciento de los egresados de la enseñanza técnica media.<sup>7</sup>

Con estos antecedentes a la vista parece obvio que el retorno a un sistema democrático civil desarrollado bajo condiciones económicas completamente distintas es casi imposible en Uruguay. Resulta por lo menos difícil imaginar cómo podría un gobierno democrático y libremente elegido restaurar las ventajas económicas y sociales de las que gozaban las capas medias uruguayas hasta mediados de este siglo y que se basaban en un avanzado sistema de asistencia social financiado por el estado, en la existencia de una numerosa burocracia en el sector público y en los ingresos en moneda extranjera provenientes en su mayor parte de las exportaciones de carne y granos. Todos estos elementos fueron eliminados por el régimen militar para hacer frente a la crisis derivada del deterioro o la pérdida de los mercados de exportación, sin tocar sus propios privilegios y los de las clases dominantes.

En cambio, parece razonable suponer que la jerarquía militar derechista uruguaya seguirá gobernando mediante el esquema anunciado en 1978 por el "hombre fuerte" del régimen y comandante del ejército, general Gregorio Alvarez. Básicamente consiste en la convocatoria a referéndum sobre una nueva constitución en 1979 ó 1980, en el funcionamiento de los partidos tradicionales (Blanco y Colorado) pero con sus estructuras y sus elecciones internas severamente controladas y en la celebración de elecciones presidenciales en 1981 con participación de los mismos partidos ya convenientemente purgados. De esta forma, Uruguay luce encaminado hacia un sistema de "democracia controlada" al estilo de su poderoso vecino, Brasil.

### ***El vuelco de Chile***

---

<sup>6</sup> Cifras tomadas del Informe Anual de la CEPAL 1974 y del artículo de Samuel Lichtensztein, "Tendencias y creencias sobre la economía uruguaya", en *Cuadernos de Marcha*, segunda época, número 1, México, 1979, pág. 31.

<sup>7</sup> **Maggiolo, Oscar:** "El Uruguay posdictatorial y la educación del pueblo", en *Cuadernos de Marcha*, op. cit. pág. 56.

La situación de Chile, la otra prolongada democracia política y civil de América Latina, es al mismo tiempo totalmente distinta y curiosamente similar a la de Uruguay. El fin del régimen representativo civil no sobrevino como culminación de un lento proceso de desintegración institucional, como en el caso uruguayo, sino como resultado de un sólo y abrupto episodio. En menos de 24 horas, el 11 de septiembre de 1973, se produjo el colapso de un sistema político excepcionalmente estable. Estuvo en vigor en la práctica (pero con más interrupciones violentas que las admitidas por sus apologistas) desde 1833, en que se promulgó la Constitución inspirada por Diego Portales.

Salvador Allende, el último presidente elegido en forma democrática, murió durante el bombardeo del palacio de La Moneda, el congreso fue clausurado, los partidos de la izquierda quedaron en la ilegalidad y los de centro y derecha resultaron con sus actividades indefinidamente suspendidas. La campaña de solidaridad mundial con los miles de militantes de izquierda asesinados, torturados, encarcelados, exiliados y desaparecidos y un severo aislamiento diplomático no fueron suficientes para impedir la progresiva consolidación de un régimen que comenzó como una junta militar cuatripartita y se fue convirtiendo cada vez más en una dictadura personal encabezada por el general Pinochet, jefe del ejército.

Una parte de la explicación de esta cadena de hechos está en la activa participación que cupo al gobierno de Estados Unidos y a su aparato de inteligencia civil y militar en la desestabilización del régimen de Allende primero y en el sólido respaldo financiero proporcionado a Pinochet después.<sup>8</sup>

Pero a nuestro juicio las razones de fondo del derrumbe de las instituciones democráticas chilenas están en el proceso mismo de democratización política y económica que culminó con el gobierno de Allende y que inevitablemente debía provocar una profunda transformación del aparato del estado, comenzando por las fuerzas armadas. Este proceso se remonta por lo menos a fines de la década de 1920 y en especial a los años 30, pero el primer serio desafío a la dominación política y económica ejercida por los grupos dueños del latifundio y del aparato financiero-industrial se produjo durante la presidencia de Eduardo Frei, el principal dirigente de la Democracia Cristiana (1964-1970). Entonces se dictó y se comenzó a aplicar la primera ley de reforma agraria y el gobierno trató de extender los beneficios de la educación gratuita y la vivienda económica a sectores cada

---

<sup>8</sup> La lucha del gobierno de Nixon contra la candidatura presidencial de Allende primero y contra su gobierno después han sido ampliamente documentadas por las investigaciones del propio Senado de Estados Unidos. En cuanto al apoyo financiero proporcionado a Pinochet, ya en febrero de 1974 se estimaba que en sólo tres o cuatro meses la junta había recibido alrededor de 300 millones de dólares en préstamos oficiales y privados de origen norteamericano. Algunos de los más importantes fueron los del Fondo Monetario Internacional (95 millones de dólares), del Banco Interamericano de Desarrollo (30 millones) y del Banco Mundial (13 millones). (Le Monde, 16 de febrero, 1974). Un estudio posterior del Institute for Policy Studies de Washington mostraba que los bancos de Estados Unidos prestaron 927 millones de dólares a Chile entre 1973 y 1978 y que los bancos privados proporcionaron el 90 por ciento de esos fondos. (Kissing's Contemporary Archives, 20 de octubre de 1978).

vez más amplios de las capas medias. Luego vino el régimen de Salvador Allende, que en menos de dos años completó la aplicación de la ley agraria, nacionalizó la minería del cobre hasta entonces en manos de tres grandes consorcios norteamericanos, expropió los grandes monopolios industriales y nacionalizó los bancos. Además, se logró una sustancial redistribución del ingreso: la participación de los sueldos y salarios en la renta nacional en el período 1970-1973 creció del 55 por ciento a más del 66 por ciento.<sup>9</sup>

Todas estas costosas reformas estructurales del aparato económico fueron emprendidas sin introducir un sólo cambio en las instituciones políticas, puesto que la combinación de partidos agrupados en la Unidad Popular nunca dispuso de la mayoría parlamentaria de dos tercios que se requería para modificar la Constitución.

En la práctica, la única fórmula que la izquierda proponía para adaptar el aparato institucional del estado capitalista a la nueva situación económica consistía en una alianza con los demócrata cristianos que proporcionara la mayoría de votos parlamentarios indispensables para modificar la Constitución. Sin embargo, en los hechos, el gobierno de Allende se encontró desprovisto de una salida negociable: o utilizaba la considerable cuota de poder de que disponía desde que la izquierda conquistó el gobierno capitalizando un sólido apoyo de masas, o renunciaba a toda iniciativa y aceptaba las severas limitaciones a sus planes económicos exigidas por la Democracia Cristiana como precio de su apoyo parlamentario.<sup>10</sup> Finalmente, ninguna de estas opciones prevaleció y la parálisis de la izquierda abrió el camino a la más brutal reacción de parte de las fuerzas de la derecha y el grueso del aparato militar.

El colapso del sistema institucional chileno se produjo con la complicidad de los demócrata cristianos, que fueron incapaces de comprender, lo mismo que los tradicionales Blancos y Colorados de Uruguay, que lo que estaba en juego no era simplemente el cambio de un gobierno por otro, sino la esencia misma del régimen democrático. La responsabilidad más grande en esta obcecación correspondió al ex-presidente Eduardo Frei, quien pasó a ser, como antes Carlos Lacerda en el Brasil, uno de esos demócratas dispuestos a luchar por la democracia hasta la muerte... de la democracia.

El general Pinochet ha manifestado con insistencia y ha demostrado abundantemente que no está dispuesto a permitir que vuelva a desarrollarse una situación

---

<sup>9</sup> Zimbalist, A. y Stalling, B: "Showdown in Chile", artículo en *Monthly Review*. N° 25, Octubre de 1973.

<sup>10</sup> Para conocer una buena interpretación en este sentido, ver el capítulo dedicado a Chile por Regis Debray en su "Crítica de las Armas". Un dato muy ilustrativo del poder de que disponía el gobierno de Allende y que no utilizó es el número de policías militarizados, o carabineros (40.000) que controlaba directamente, a través del Ministerio del Interior. Un pequeño pero muy eficiente ejército que Pinochet y el alto militar se cuidaron de poner bajo la férula del Ministerio de la Defensa, inmediatamente después del golpe.

similar a la existente hasta 1973 o incluso hasta 1970. Para subrayar su decisión, se ha desembarazado sin miramientos de aliados iniciales como el general Gustavo Leigh, ex-comandante en jefe de la fuerza aérea, que presionan por un rápido retorno a un régimen de gobierno civil. Además, ha señalado expresamente que aspira a consolidar un sistema de "democracia restringida o autoritaria" mediante la promulgación de un nuevo texto constitucional y que no habrá elecciones medianamente libres en Chile por lo menos hasta 1991.

Por otra parte, la profunda transformación introducida en la estructura económica del estado chileno por el régimen militar hace difícilmente concebible el retorno a un sistema político similar al existente hasta 1973. Como ocurre en el caso del Uruguay, cuesta imaginar cómo podría un gobierno presidido por Eduardo Frei, por ejemplo, financiar la recuperación de los niveles de ingreso de que disponían los trabajadores y las capas medias chilenas en 1970 (para no mencionar la situación excepcional del año 1971). Con una deuda exterior que ya supera los 7.000 millones de dólares y consume alrededor del cuarenta y cinco por ciento de los ingresos en divisas por concepto de su solo servicio<sup>11</sup> no parece viable recurrir a un financiamiento de la expansión por la vía del endeudamiento externo. Pero las dificultades económicas de tipo "técnico" no serían probablemente las mayores. El gran problema sigue estando en el agudo enfrentamiento de las clases sociales. ¿Cómo respondería un gobierno realmente democrático a la natural presión de la mayoría de la población por recuperar al menos una parte de sus niveles de ingreso perdidos sin verse obligado a recurrir a alguna forma de represión?. Como lo ha planteado el sociólogo norteamericano especialista en cuestiones latinoamericanas, James Petras:

"¿Es posible ganar elecciones reduciendo el ingreso de los trabajadores en un sesenta por ciento, como en Chile, o en un cuarenta por ciento, como en Argentina, o comprimiendo los salarios durante doce años, como en Brasil?"<sup>12</sup>

Y, mirándolo desde el punto de vista de las clases dominantes, ¿por qué habrían de ceder graciosamente los privilegios que supieron defender con tanta ferocidad en septiembre de 1973 y en los años siguientes?. Esos privilegios no han hecho sino multiplicarse y concentrarse como nunca antes, al menos en el período que va desde la década de 1920 hasta hoy. Un estudio reciente demuestra que en diciembre de 1978 cinco grandes grupos económicos controlaban más de la mitad del patrimonio de las 250 empresas privadas más importantes de Chile y 214 de ellas eran administradas por no más de 80 personas. El más poderoso de dichos grupos había acumulado un patrimonio estimado en 1.000 millones de dólares y controlaba casi el 25 por ciento de las 250 empresas estudiadas.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Martin, Everet G. : "Un Laboratorio Ideal para la teoría económica - El Chile de los Chicago Boys", artículo en el Wall Street Journal reproducido por el Diario de Caracas, 14 de diciembre, 1979.

<sup>12</sup> Petras, James F.: "La Mort du Capitalisme démocratique - L'Amérique Latine, banc d'essai d'un nouveau totalitarisme", en *Le Monde Diplomatique*, 4 de abril, 1977.

<sup>13</sup> Dahse, Fernando: "El Mapa de la Extrema Riqueza", Santiago, 1979.

Teniendo estos antecedentes a la vista, el proyecto del general Pinochet para la construcción de una "democracia autoritaria" parece penosamente realista, aún cuando él mismo no fuera el llamado a presidirla. El propio Eduardo Frei admitió en una reciente entrevista de la televisión venezolana que no le disgustaría una evolución similar a la experimentada por Brasil después de 15 años de dictadura militar. Los partidos de izquierda, duramente golpeados por la represión y el exilio masivo de sus militantes, atraviesan por un intenso proceso de autocrítica y revisión de sus cuadros dirigentes y sus tesis tradicionales. Este proceso ha sido notorio en el partido socialista y en los sectores cristianos de izquierda. En general, parece advertirse una tendencia similar a la de los grupos izquierdistas brasileños que, conscientes de su incapacidad para presentarse como alternativas de poder, dirigen sus esfuerzos con éxito creciente hacia los campos sindical, cultural y de los medios de comunicación de masas.

### ***Perú: ¿retorno o retroceso?***

Perú es tal vez el más interesante ejemplo de las dificultades que plantea cualquier esfuerzo por conciliar un sistema de democracia política con una transformación de las estructuras sociales y económicas lo bastante profunda como para proporcionar a la mayoría de la población una participación justa en la riqueza del país. En los diez años transcurridos desde el derrocamiento del Presidente Fernando Belaúnde Terry, en 1968, el gobierno militar encabezado primero por el general Velasco Alvarado y luego por el general Morales Bermúdez pareció resueltamente encaminado hacia la creación de un modelo de gobierno en que, sin llegar a transformaciones socialistas, serían sacrificadas las formalidades democrático-burguesas en aras de la democratización de las estructuras económicas. El gobierno militar llevó a cabo una profunda reforma agraria, especialmente en el área de los latifundios dedicados al cultivo de la caña de azúcar de la región de la costa, nacionalizó la industria minera del cobre y la industria pesquera y expropió los periódicos más conservadores. Pareció incluso que los militares estaban dispuestos a movilizar y concientizar a los grupos más postergados económica y socialmente a través de una institución muy original, SINAMOS, que fue creada en 1972 y que tenía jurisdicción sobre áreas tan sensibles como la atención de las barriadas marginales urbanas y el transporte colectivo.

Sin embargo, una década después de su inicio, el experimento peruano hacía frente a graves dificultades. La crisis en la industria pesquera causada por el retiro de la anchoveta, la baja en los precios del cobre, la acumulación de una enorme deuda externa (superior a 8.000 millones de dólares) y una inflación descontrolada, del orden del 70 por ciento anual llevó al régimen a revertir su política progresista. Fueron cancelados los subsidios a rubros de consumo masivo y ello significó alzas de entre 50 y 70 por ciento en el transporte público, los combustibles y los alimentos esenciales. Estas drásticas medidas condujeron a una violenta reacción popular que se tradujo en revueltas en las principales

ciudades y a una exitosa huelga general en mayo de 1978. La autoridad del gobierno se vio erosionada por estos renuncios a su anterior política populista. Como para simbolizar su nuevo estilo, el régimen disolvió en el mismo año 78 dos instituciones que habían suscitado grandes esperanzas dentro y fuera del Perú: SINAMOS y la Confederación Nacional Agraria.

Coincidiendo con estas medidas regresivas en el plano económico y social, la jerarquía militar anunció el retorno a un sistema democrático presidido por civiles. A comienzos de 1980 este proceso se hallaba muy avanzado: estaba funcionando una asamblea constituyente y se preparaba la elección de un Presidente de la República durante el mes de mayo. Sin embargo, los planes de restauración de la democracia formal hacían frente a serias dificultades: el APRA, tradicional grupo socialdemócrata, no consiguió una mayoría suficiente (ocupaba 37 de los 100 escaños) para imponer su proyecto de nueva constitución. La muerte de su líder histórico Víctor Raúl Haya de la Torre lo privó de su figura más influyente. La izquierda, pese al 30 por ciento que sumaron sus votos en las elecciones de la Constituyente, lucía profundamente debilitada por sus divisiones. La derecha, aunque dividida también en dos grupos (Acción Popular, de Belaúnde Terry y Partido Popular Cristiano, de Luis Bedoya Reyes) parecía más dispuesta a la acción común y a explotar su condición de árbitro en la Constituyente.

En fin, la actitud sin contemplaciones de la jerarquía militar ante las reivindicaciones económicas del movimiento sindical y el hecho de que la gran población indígena (60 por ciento del total) permaneciese básicamente al margen del sistema político, económico y cultural, hacía suponer que el retorno a formas civiles y democráticas de gobierno estaría lejos de significar nuevos avances hacia un régimen económico y social más justo.

### ***Aspectos alentadores***

En medio de este cuadro básicamente negativo en que el continente sigue sometido a una clara mayoría de regímenes militares conservadores o francamente reaccionarios a comienzos de la década de 1980 parecían advertirse algunos síntomas positivos: Venezuela, uno de los cinco países regidos por gobiernos democráticamente elegidos, parecía dispuesta a utilizar el instrumento de presión que significan sus enormes ingresos petroleros para favorecer la consolidación de sistemas políticos democráticos en la región. Su influencia resultó positiva en la sustitución del heredero de Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer, por el latifundista socialdemócrata Antonio Guzmán en la presidencia de Santo Domingo. También favoreció la consolidación del gobierno revolucionario sandinista en Nicaragua, aún cuando en ese caso la actitud del nuevo presidente socialcristiano, Luis Herrera Campins, fue menos resuelta que la de su antecesor de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez. Y significó un sólido respaldo para el nuevo régimen del abogado Jaime Roldós, que se convirtió en el nuevo presidente civil de Ecuador en agosto de

1979 luego de un largo, confuso e inestable período de un año en que debieron celebrarse elecciones presidenciales a dos vueltas para confirmar su victoria.

Otro elemento positivo para la consolidación de gobiernos civiles ha sido la actitud concertada de los países miembros del Pacto Andino, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y más recientemente, Panamá. El respaldo que esos cinco gobiernos proporcionaron al movimiento sandinista resultó tan importante como el que luego dieron a la nueva presidente, Lidia Gueiler en Bolivia.

Un tercer aspecto alentador ha sido la política exterior seguida por el Presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, que al menos ostensiblemente ha estado comprometida con la defensa de los derechos humanos. En este artículo hemos omitido deliberadamente un análisis de la influencia ejercida por los intereses norteamericanos en la región durante los últimos años. Sería necesario disponer de mucho mayor espacio para analizar los cambios introducidos en la política hemisférica por la administración Carter en comparación con la llevada a cabo por Richard Nixon y su principal consejero, Henry Kissinger. Sin embargo, pueden señalarse algunos de importancia: lograda la consolidación de regímenes autoritarios y ostensiblemente pro-norteamericanos en los países del cono sur, asegurada desde mediados de la década del 60 la fidelidad de Brasil, sin duda la pieza más importante de la región, Carter pudo actuar con mayor flexibilidad frente a conflictos relativamente menos importantes para los intereses de Estados Unidos como el de Nicaragua. Por otra parte, el creciente endeudamiento externo de todas las naciones latinoamericanas y la penetración de los grandes consorcios transnacionales por la vía de la dependencia tecnológica hizo la presencia norteamericana en la zona menos abierta y por lo mismo menos conflictiva que en el pasado. La influencia de Estados Unidos es ahora posiblemente mayor que en la violenta década de los años 60, caracterizada por el surgimiento de numerosos focos guerrilleros. Sin embargo, combatiría resulta mucho más complejo. En general, el gobierno de Jimmy Carter ha enfrentado una resistencia mucho menor en la región que la sufrida por sus predecesores. Y por lo mismo no ha tenido que recurrir a extremos como la invasión de Santo Domingo en 1965 o la intervención en Bolivia, Brasil y finalmente Chile.

### **Conclusión**

Como conclusión podría decirse que la década de 1980 encontró a América Latina sometida a regímenes autoritarios de distinto signo en la enorme mayoría de los países. El más importante de todos, Brasil, parecía señalar el rumbo de evolución que han de seguir algunos de los gobiernos dictatoriales presididos por militares hacia sistemas de democracias más o menos "controladas". Dos de aquellos en que la democracia representativa parecía más sólidamente implantada, Uruguay y Chile, estaban sometidos a sistemas autoritarios aparentemente consolidados. Excepcionalmente, algunos países y en especial Venezuela, de gran importancia por la riqueza creciente de sus recursos financieros, luchaban por cambiar el sig-

no de autoritarismo prevaleciente en la región. Salvo el proceso en curso en Nicaragua, parecía impensable, a corto plazo, el advenimiento de gobiernos capaces de conciliar sistemas de democracia política con reformas capaces de asegurar también una democracia económica y social.

### **Referencias**

- Anónimo, AMNESTY INTERNATIONAL REPORT. p162 - 1977; La mort du capitalisme démocratique-L'Amérique Latine, banc d'essai d'un nouveau totalitarisme.
- Anónimo, LATIN AMERICA ECONOMIC REPORT. 26-Mayo. p1960 - 1978; Showdown in Chile.
- Cardenal, Ernesto, EN CUBA. - Barcelona, España. 1977; En un sentido más crítico.
- Cayuela, José, DERECHOS INHUMANOS EN GRAN BRETAÑA. - Barcelona, España. 1979; El Uruguay posdictatorial y la educación del pueblo.
- Dahse, Fernando, EL MAPA DE LA EXTREMA RIQUEZA. - Santiago de Chile, Chile. 1979;
- Debray, Régis, CRITICA DE LAS ARMAS. - Chile;
- Duverger, Maurice, THE USES OF POWER IN SOCIETY. - Londres. 1967; The idea of politics.
- Everet-G., Martin, WALL STREET JOURNAL DIARIO DE CARACAS - EN PRENSA. 14 diciembre - 1979;
- Harnecker, Marta, CUBA, DEMOCRACIA O DICTADURA. - México. 1978; Como opera la participación en una sociedad socialista.
- Informe Anual de la CEPAL 1974; Lichtensztejn, Samuel, CUADERNOS DE MARCHA SEGUNDA EPOCA. 1. p31 - México. 1979;
- Maggiolo, Oscar, CUADERNOS DE MARCHA. p56 - México;
- Petras, James F., LE MONDE DIPLOMATIQUE - EN PRENSA. 4 abril - 1977;
- Philip, Agee, CIA EN URUGUAY EN SU CIA DIARY - INSIDE THE COMPANY. - Nueva York, U.S.A. 1975; Un laboratorio ideal para la teoría económica - El Chile de los Chicago Boys.
- Yglesias, José, IN THE FIST OF THE REVOLUTION. - Londres. 1970; Tendencias y creencias sobre la economía uruguaya.
- Zimbalist, A.; Stalling, B, MONTHLY REVIEW. 25-October - 1973;